

CONTRIBUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL A LA GOBERNANZA AMBIENTAL: EL CASO DE QUÉBEC

CONTRIBUTION OF THE SOCIAL INTERVENTION'S INTO ENVIRONMENTAL GOVERNANCE: THE CASE STUDY OF QUÉBEC

ANA-LUCÍA MALDONADO-GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. MÉXICO

RESUMEN

El Consejo regional del medio ambiente (CRE)¹, organismo no gubernamental (ONG) en Québec, constituye una plataforma de legitimación de prácticas de intervención social relacionadas con la protección y defensa del medio ambiente en un contexto de gobernanza cívica ambiental. La noción de gobernanza hace operativa a la teoría de la regulación e inspira el marco teórico de la investigación que propicia esta publicación; otro enfoque también considerado es el de los saberes de la acción. Se aplicó una metodología cualitativa de tipo descriptiva utilizando los métodos de estudio de caso, análisis documental y entrevista. Se detecta nula presencia de profesionales de la disciplina del trabajo social en el CRE, aunque su participación sería muy valorada por los interventores actuales, quienes pertenecen a diversas disciplinas y en sus prácticas cotidianas fungen como interventores sociales. En cuanto a la participación de actores sociales, se identifica una mayor presencia del sector comunitario, dada su compatibilidad con la misión del CRE. Existen también las relaciones de colaboración consensual o conflictual entre actores públicos, privados y comunitarios. En este contexto, la intervención se presenta dentro de un modelo de desarrollo local de la organización comunitaria, aunque algunas manifestaciones del modelo de acción social también están presentes. Existen dieciséis CRE en la provincia de Québec, tres de ellos fueron objeto de la investigación que aquí se presenta: Saguenay – Lac-Saint-Jean, Capital-Nacional² y Montreal.

PALABRAS CLAVES

Intervención Social; Organización de la Comunidad; Organizaciones No Gubernamentales; Participación Social; Québec.

ABSTRACT

The Regional Environmental Council (CRE), a nongovernmental organization in Québec, constitutes a platform to legitimize social intervention practices related to the protection and defense of the environment in the context of civic environmental governance. The notion of governance is based here on the regulation theory and inspires the theoretical framework of the master research of this publication; the knowledge-in-action is another approach also considered. A descriptive qualitative methodology, using a case study, document analysis and interviews, was used. There is no professional presence of social work's discipline in the CRE, even if the participation of these professionals would be greatly valued by the actual professionals of this intervention in the CRE, who belong to several disciplines and make social interventions in their daily practices. Also, it identifies a greater involvement of the community sector given the empathy of this sector with the mission of this ONG. Consensual or conflicting collaboration relationships between public, private and community actors are also presented. In this context, the intervention takes place within a local-development model of community organization, although some ways of social action model are also present. There are sixteen CRE in the province of Québec, three of them were investigated in the research presented here: Saguenay – Lac-Saint-Jean, National Capital and Montreal.

KEYWORDS

Social Intervention; Community Organization, Non-Governmental Organizations; Social Participation; Québec.

Recibido: 2012.10.25. Revisado: 2013.01.08. Aceptado: 2013.01.23. Publicado: 2013.06.01.

Correspondencia: Ana Lucía Maldonado González. Diego Leño N° 8, Col. Centro Xalapa, Veracruz. México, C.P. 91000 Tlfno: (228) 842 1700 ext. 13857. E-mail: anmaldonado@uv.mx

INTRODUCCIÓN

La intervención social, orientada hacia la defensa y protección del medio ambiente, está presente y es reconocida cada vez con mayor énfasis en distintas regiones del mundo. Este texto busca presentar lo que sucede en Québec, donde profesionales de muy diversas disciplinas se implican como interventores sociales en el marco de una gobernanza cívica ambiental, la cual implica la apertura de los actores para participar, consensuar, negociar, acordar. Se trata de mostrar aquí una experiencia nacida de la acción colectiva, apoyada por practicantes de la intervención social y legitimada más adelante por el Estado. Es una experiencia con características particulares en Québec, la cual podría adecuarse a otros contextos con participación ciudadana y apertura del Estado para reconocer y apoyar experiencias de base, más que la imposición de programas dirigidos desde las estructuras de poder.

Nuevos modelos de concertación aparecen en Québec con mayor énfasis a partir de los años ochenta, en los cuales el Estado no es el único que decide (Ducharme y Vaillancourt, 2003). Participan en estos organismos actores provenientes de instituciones públicas, sociedad civil, universidades, sindicatos, empresa privada, etc., quienes se asocian, comparten recursos, experiencia, capacidades, proyectos y crean una nueva coalición de acción fundada en responsabilidades compartidas para definir (co-construcción), implementar (co-producción) y evaluar (co-evaluación) las prácticas, reglas y rutinas del sistema. Es justamente en esa época cuando la educación ambiental entra en escena y comienza a desarrollarse un análisis crítico de las realidades ambientales, sociales, educativas y su interrelación, con el fin de transformarlas mediante la intervención social. En estas prácticas participan movimientos de base, de desarrollo bioregional, de diálogo de saberes, identificando al medio ambiente como medio de vida (Sauvé, 1999). En este contexto la intervención social invita a dinámicas con enfoque socio-ambiental, colaborativas, solidarias y críticas, orientadas hacia un desarrollo local sustentable.

Ciertamente los nuevos retos relacionados con los problemas medioambientales y con las necesidades de la población, permiten el surgimiento de otras formas de debatir, de imaginar, de utilizar de manera distinta las riquezas naturales y los talentos humanos con el fin de favorecer una acción humana más juiciosa en el mundo. La intervención social propone formas de actuar de los individuos, de las

colectividades y de los grupos sociales, que van de lo social establecido (sus instituciones, sus leyes, su derecho), hacia lo social en formación (sus experimentaciones, sus iniciativas y formas de socialización, de solidaridad y de movilización de talentos y de conocimientos) (Babin, 2003). Se trata de una intervención que se presenta derivada de una crisis de representatividad y de legitimidad de los dirigentes políticos y económicos en las sociedades contemporáneas, buscando así sensibilizar y educar al conjunto de actores hacia una nueva gobernanza cívica ambiental.

Para la investigación que origina esta publicación (Maldonado-González, 2008), se aplicó una metodología cualitativa de tipo descriptiva, bajo la perspectiva de construcción teórica, misma que permitió el reconocimiento y la visibilidad de ciertas problemáticas y cuestiones socio-ambientales en cada contexto estudiado. Se tuvo acceso a datos empíricos verbales y escritos, permitiendo así responder a la pregunta de investigación sobre la contribución de la intervención social a los modos de gobernanza cívica ambiental. Los métodos utilizados fueron: el estudio de caso, para cada uno de los tres CRE participantes en la investigación; el análisis documental, mediante consultas de archivos y documentos oficiales tanto del CRE como de cada una de las regiones de estudio; la entrevista individual semi-estructurada, aplicada a directores del CRE, actuales y del pasado³ (quince entrevistas en total), así como a los miembros del CRE pertenecientes al sector comunitario, público y privado (quince entrevistas en total). Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad para proceder al análisis de las categorías previamente definidas y de las identificadas al avanzar. La triangulación fue posible gracias a la corroboración de la información dada por un entrevistado, con al menos un segundo entrevistado. El tratamiento de la información, se basó en el análisis de contenido, donde las categorías son definidas como rúbricas que guardan un grupo de elementos comunes bajo un título genérico (Bardin, 2003). A continuación se presentan aspectos generales del contexto de estudio.

EL CRE EN QUÉBEC Y EN LAS REGIONES ESTUDIADAS

El CRE es un organismo regional sin fines de lucro, surgido de la participación ciudadana con el objetivo de promover la protección y la defensa del

medio ambiente en una dinámica de desarrollo local sustentable. Está integrado por un Consejo de administración y por Comités ejecutivos electos democráticamente en cada sede regional. Los miembros que participan al interior del organismo pertenecen al sector comunitario principalmente, aunque también hay participantes del sector público y, en menor proporción, del sector privado. Cada uno de los dieciséis CRE de la provincia de Québec dispone de un presupuesto anual que cubre parcialmente su funcionamiento, otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno provincial, esto a partir de que fueron reconocidos y legitimados en 1995, aunque la mayoría de ellos ya existía con anterioridad.

Los dieciséis CRE se concentran en una red llamada Reagrupamiento Regional de Consejos Regionales del Medio Ambiente (RNCREQ)⁴ reconocida también por el gobierno provincial como interlocutor para la concertación en medio ambiente y desarrollo sustentable. Esta red facilita el intercambio de experiencias entre las regiones, enmarca las relaciones con los actores comunitarios, públicos y privados a nivel provincial y participa en el desarrollo y en la promoción de una visión global del desarrollo sustentable en Québec. Por medio de los dieciséis CRE, el reagrupamiento cuenta con más de mil 917 miembros provenientes de organismos ambientales, gobiernos locales, organismos paraestatales, corporaciones privadas, miembros individuales (RNCREQ, 2011).

Considerando que la provincia de Québec se divide en diecisiete regiones administrativas y que sólo en la región Gran Norte no ha sido aún promovido y desarrollado un CRE, conviene destacar que en la mayor parte del territorio provincial existe legítimamente un espacio de participación ciudadana para la defensa y protección del medio ambiente. Dos aspectos cabe reforzar en este punto: en primer lugar, el hecho de que el CRE surgió de la acción colectiva, con grupos de ciudadanos movilizados por un interés común de protección y defensa ambiental; en segundo lugar, el haber obtenido del gobierno de Québec la legitimación de sus prácticas a través del tiempo. Esto último no siempre es alcanzado por grupos ambientalistas en otros contextos del mundo, lo que hace particularmente interesante presentar las prácticas de intervención ahí efectuadas, en los diferentes tiempos y espacios que abarcan los tres CRE estudiados: 1) Saguenay – Lac-Saint-Jean; 2) Capital Nacional / Québec, y 3) Montreal.

En lo que respecta a Québec, se trata de la provincia territorialmente más extensa de Canadá, con

una superficie de tierra firme de 1.312.126 km², con un total de 7.979.663 habitantes (Institut de la Statistique du Québec, 2012). Las regiones de estudio fueron elegidas en función de la época de creación de los CRE así como por sus características físicas. El CRE de Saguenay – Lac-Saint-Jean, surge en 1973 y fue el primero de este tipo en Québec, en esa época la conciencia ecológica se tradujo en las primeras acciones colectivas en esta región mayoritariamente rural. Por su parte, el CRE de la región Capital-Nacional, surge en 1989, en esta región se mezcla la ciudad capital de la provincia (Québec) y un importante territorio rural. Finalmente, el CRE-Montreal surge en 1996 y se encuentra en la región que abarca la más grande ciudad de esta provincia, totalmente urbana y metropolitana. Como referencia general, algunos aspectos de cada una de estas regiones se muestran a continuación:

1) *Saguenay – Lac-Saint-Jean*: Se trata de una región de 95.893 km² con 273.461 habitantes (Institut de la Statistique du Québec, 2012). Es un territorio rico en recursos naturales: bosques, ríos y lagos. Dicha configuración ambiental ha marcado su actividad económica a través de la industria de aluminio, madera, pulpa y papel, además del turismo.

2) *Capital Nacional / Québec*: Esta región comprende una superficie de 18.639 km², ocupados por 701.204 habitantes. Se caracteriza por sus grandes espacios naturales, más de 92 por ciento del territorio es ocupado por bosques, lagos y mantos acuíferos. La concentración urbana correspondiente a la ciudad de Québec distingue a esta región. La actividad gubernamental constituye la principal base económica, seguida del turismo y de la actividad industrial (Institut de la statistique du Québec, 2012).

3) *Montreal*: Predominantemente urbana y metropolitana, la región de Montreal es la primera en importancia por su población en toda la provincia de Québec, 1.958.257 habitantes en una superficie de 498 km² (Institut de la statistique du Québec, 2012). El territorio de Montreal cuenta con once islas y alrededor de 75 kilómetros de costa, en una situación geográfica que ha permitido su rápida industrialización. La economía se encuentra principalmente dentro del sector terciario. También Montreal es cuna de múltiples establecimientos de enseñanza superior y de investigación.

El tiempo y el espacio fueron criterios importantes en la elección de los CRE estudiados. De esta forma se tuvo la seguridad de conocer los retos de cada época y región, tanto para los interventores como para los actores participantes.

INTERVENCIÓN Y GOBERNANZA CÍVICA AMBIENTAL

Interesa en este punto abordar la relación de la intervención social con la protección y defensa de los ecosistemas terrestres y marinos dentro de una gobernanza cívica. Para esto, cabe primeramente recordar que la intervención social persigue objetivos tales como la transformación social, el desarrollo de una conciencia crítica sobre las condiciones sociales y económicas que marginalizan a ciertos grupos sociales, el establecimiento de lazos entre interventores y comunidades, lo que permite crear alianzas grupales más que individuales para la acción y el desarrollo del empoderamiento del grupo de interés (Hardina, 2002). La intervención busca entonces promover una mayor participación de la comunidad en los asuntos públicos según los principios democráticos y la colaboración más o menos consensual entre los actores participantes. En el contexto del medio ambiente, la intervención social orientada hacia un desarrollo local sustentable se apoya de muy diversos marcos de referencia: 1) teorías sociológicas, como la teoría de los movimientos sociales y el proceso de desarrollo regional; 2) la ciencia política (nociones de poderes dominantes, influencia política y estructura política); 3) la economía (teorías de la producción, de la distribución y del consumo económico); 4) la educación (teorías de la educación popular, no formal, de adultos); la filosofía (teorías de la justicia social y de la ética); 5) en ciertos casos también de la religión (teología de la liberación). Asimismo, de la biología, la zoología, la bioquímica y otras diversas ciencias que competen al medio ambiente (Estes, 1993). Esto permite que profesionales de muy diversas disciplinas se encuentren inmersos en las prácticas de intervención social, como fue posible identificar en los CRE estudiados, donde se detectaron interventores con formaciones muy diversas: geografía, biología, urbanismo, ordenamiento territorial, arquitectura, historia, ciencias políticas, administración, comunicación, animación social. Específicamente la profesión de trabajo social no se encontró presente en la intervención del CRE, aunque las prácticas ahí realizadas son sin duda alguna pertinentes para esta disciplina; además de que una mayor participación de estos profesionales en el

CRE fue considerada deseable por las y los interventores entrevistados.

Cabe destacar que las prácticas profesionales de intervención social no son guiadas únicamente por una base teórica predeterminada, sino que se fundan también en los conocimientos derivados de los saberes de la experiencia (Racine, 2000). Es decir, la intervención se inspira principalmente de la perspectiva de la 'práctica reflexiva' propuesta por Schön (1994, en Racine, 2000), la cual otorga un estatus de actor a los interventores en la construcción de su saber. Con este enfoque, el aprendizaje es un acto social que permite al ser humano construir, incorporar y estructurar su experiencia a través de las interacciones con los otros. El trabajo cotidiano permite a los interventores obtener los saberes de la acción, sin embargo, una cierta forma de saber entra en juego en toda acción inteligente, es entonces cuando el saber-hacer no está sólo en la acción, sino que se construye a través del ejercicio inteligente del profesional en la intervención (Schön, 1986). Este autor propone un modelo en el cual la construcción de conocimientos de los practicantes se elabora progresivamente a través de la reflexión en curso de la acción y sobre la acción. Sin invalidar esta proposición, Racine (2000) va más allá y propone la co-construcción de saberes en las prácticas, en la cual participan los actores interesados en un mismo objeto, implicados en una práctica común de intervención, en un sentido de co-producción. Todo esto invita a la construcción de saberes de experiencia, a no oponer los enfoques del saber recibido y del saber construido, a no separar los saberes formalizados y los saberes construidos a partir de la experiencia práctica (Racine, 2000; Gadrey, 1994). La aceptación de diversos modos de conocimiento permite comprender la complejidad del actuar de los interventores, lo que no se funda solamente sobre los conocimientos teóricos generados por las ciencias sociales y humanas, sino también sobre los conocimientos derivados del aprendizaje de la experiencia (Racine, 2000), un aprendizaje que se presenta además en un contexto de gobernanza ambiental, gracias a la participación de muy diversos actores en esta construcción de saberes. En el modelo de gobernanza ya no funcionan las órdenes y los mandatos, se requiere de interventores con competencias de educador, gestor, consultor, negociador, moderador, concertador (Paquet, 2001). La gobernanza supone la negociación abierta entre los múltiples actores, la asociación entre la esfera pública, privada y social (Canet, 2004), tal y como es posible apreciar en los CRE estudiados, donde la

gobernanza constituyó una forma de hacer operativa a la teoría de la regulación, la cual se interesa en los períodos de crisis y de estabilidad, así como en los acuerdos que permiten a los diversos actores sociales interactuar según ciertas reglas, aunque los intereses sean divergentes (Boyer, 2002).

Se busca entonces llegar a construir una sociedad de *partenariado* o asociación, donde las autoridades locales solicitan la participación activa del sector comunitario y privado. Ciertamente pueden existir tensiones, rivalidades, conflictos de interés, cada actor busca insertar su proyecto individual dentro de un programa más amplio y optimizar su implementación. Pero los nuevos desafíos relacionados con los problemas ambientales y las necesidades de la población, estimulan la creatividad para proponer y desarrollar diversas estrategias en la búsqueda de acuerdos entre actores, en un marco de gobernanza ambiental, como se verá ahora a través de los CRE estudiados.

DINÁMICA DE RELACIONES ENTRE INTERVENTORES Y PARTICIPANTES: EN UNA GOBERNANZA AMBIENTAL

Tratándose del principal representante de la sociedad civil en medio ambiente, reconocido legítimamente, el CRE es un organismo que permite a la administración pública conocer la posición de toda una red de organismos ambientalistas, a través de uno solo. Mediante la institucionalización de este organismo, es posible identificar un proceso de legitimación de saberes expertos, el trabajo asalariado del interventor, así como las relaciones entre interventores y actores sociales, se trata de un enfoque político de intervención (Boulianne et Comeau, 2001; Nelisse, 1997). La participación de actores sociales se presenta en función de los intereses particulares de cada uno de ellos, creando así una dinámica de relaciones consensuales o conflictuales en un marco de gobernanza ambiental que genera acuerdos favorables a un desarrollo local sustentable.

Además de los saberes de la acción, la intervención del CRE ha recurrido en sus prácticas a modelos y estrategias de intervención prescritos. Se trata principalmente del modelo de desarrollo local (negociación y consenso) y de acción colectiva (presión social, movilización y protesta) propuestos por Rothman (1968, en Rothman 1995) para alcanzar la constitución, seguimiento, reconocimiento y legitimación de sus prácticas en las diferentes épocas y espacios.

El nivel regional en el que se ubican los CRE, contribuye a que se entretengan relaciones estrechas

entre esta red ambientalista y las instancias gubernamentales. Sin embargo, los participantes que pertenecen al sector público, no siempre se manifiestan como miembros activos del CRE, se reconocen más bien como actores de gobierno preocupados por las problemáticas ambientales de la región, así se detectó entre quienes fueron entrevistados. Su acción de decisores y de representantes de Estado promulgador de leyes, de políticas y de proyectos que conciernen al medio ambiente, constituye una tarea que realizan cotidianamente desde fuera de la red del CRE. Para ellos resulta habitual relacionarse con la principal red ambientalista en diversos espacios regionales de concertación, en los que se abordan temas afines, entre otros más que afectan a la región. Se aprecia además que los funcionarios ejercen su derecho de discreción; su presencia y participación en cualquier organismo comunitario puede ir en contra de este principio, por lo que seguramente su participación en el CRE es individual, más que como representantes públicos.

La relación entre los interventores del CRE y el sector público varía según el nivel de poder. El nivel más cercano y que demuestra mayor interés por la protección ambiental, es el nivel local, sin embargo su poder de decisión es bajo. Las decisiones dependen más bien de la Conferencia regional de diputados donde participa también el sector privado y comunitario. Desde el punto de vista de los ambientalistas, las decisiones en esta instancia pública con frecuencia se orientan más a favor de los actores económicos, por lo que la presencia del interventor del CRE en esta plataforma resulta relevante para influir en las decisiones que repercuten al medio ambiente. El nivel provincial está más en contacto con el RN-QCRE, mientras que las relaciones entre el CRE y el nivel federal son casi inexistentes.

Como ya se ha mencionado, una parte del financiamiento anual de los CRE proviene del gobierno provincial y sobre este aspecto existen opiniones opuestas de los distintos miembros del sector comunitario: 1) para los más críticos grupos ambientalistas y organismos comunitarios, esta situación podría significar un compromiso del CRE para colaborar con el sector público en ciertos asuntos y verse comprometido a ceder ante demandas perjudiciales al medio ambiente; 2) para los interventores del CRE y otros grupos menos radicales, el CRE tiene margen de maniobra para desarrollar estrategias y oponerse a decisiones amenazadoras para los ecosistemas, sin importar su origen; es decir, su integridad no se ve comprometida por el financiamiento público. Pue-

de identificarse así el *partenariado* o la asociación de actores diversos dentro de una concertación conflictual, tesis definida por Vaillancourt (1994) como aquella en donde tanto actores comunitarios como públicos están abiertos a la concertación, conscientes de sus propias identidades y objetivos, lo que deriva en una asociación que ocasionalmente se desarrolla en medio de tensiones y luchas.

A pesar de esto, es comprensible el interés del Estado por financiar parcialmente al CRE, ya que resulta preferible negociar con un solo organismo ambiental, experto en los retos de la región, que con múltiples organismos pequeños. Se trata de un organismo que logra establecer consenso sobre los asuntos ambientales en las regiones donde se encuentra, delegando responsabilidades entre los actores locales y realizando el arbitraje necesario. Ciertamente el financiamiento público resulta insuficiente y no cubre más que una parte de los costos reales de operación de los CRE. Corresponde entonces a los interventores de cada CRE buscar otras fuentes de financiamiento mediante proyectos sustentables, desarrollo de iniciativas de la economía social o bien, subvenciones del sector privado.

Cabe destacar que el Estado realiza iniciativas favorables a los ecosistemas, principalmente a través de la implementación de políticas de protección y defensa del medio ambiente. Dicha acción podría ser percibida como un acto voluntario; sin embargo, si se analiza la acción de la sociedad civil, la adopción de algunas de estas iniciativas ha sido consecuencia de la presión ciudadana, evitando así un mayor conflicto social y ambiental. A pesar de ello, puede considerarse que ambos actores participan de manera contributiva en la defensa ambiental, en el marco de una gobernanza cívica.

Por otro lado, en ocasiones también las decisiones tomadas por el Estado son poco favorables para el medio ambiente y pueden encontrar su origen precisamente en demandas de la población, secundadas por el sector público y privado, participando así conjuntamente los tres actores en una forma de violencia estructural hacia el medio ambiente (Maldonado-González, 2006). Es posible entonces identificar dos tipos de demandas de la población que van en contra de los ecosistemas: el empleo (las formas de producción) y el modo de vida (el consumismo). En el primer caso, se encuentra la aspiración de un trabajo formal y bien remunerado. Las personas entrevistadas creen necesario responder a esta aspiración, pero con una regulación ambiental más estricta y empleos ofrecidos dentro de modos

de producción menos dañinos para los ecosistemas. Tal y como lo afirma Merrien (1998), se requiere de modos de regulación ambiental que permitan nuevas definiciones de gobierno, de organización de poder en el marco de una gobernanza cívica ambiental, como el caso del CRE, para enfrentar la crisis presente. Esto principalmente se comenta en el caso de regiones donde la explotación forestal alcanza dimensiones que afectan a los ecosistemas, dado que se tiene una visión a corto plazo y son creados empleos bajo regulaciones ambientales más flexibles, por ejemplo en Saguenay – Lac-Sain-Jean. En el segundo caso, referente al modo de vida, se encuentra el consumismo que acompaña con frecuencia al estilo de vida, especialmente en habitantes de las ciudades de Québec y Montreal. Todo indica que el gobierno favorece a los promotores que privilegian este estilo de vida, sin importar los riesgos ambientales. La construcción de autopistas y de puentes es entonces necesaria para facilitar el desplazamiento de personas que tienen los medios para adquirir un coche y trasladarse de las zonas residenciales, en la periferia, a sus lugares de trabajo en el centro de la ciudad. En este contexto, el gobierno provincial desarrolla otro tipo de colaboración pública – privada, que en este caso excluye a los organismos ambientalistas locales, quienes tienen el sentimiento de que las luchas contra la construcción de autopistas y puentes están perdidas anticipadamente debido a la fuerza que tienen los promotores económicos.

Es así como la influencia y contribución de la intervención social a la gobernanza ambiental implica diferentes modalidades en el tiempo y en el espacio. Puede ser posible observar un verdadero compromiso de los diferentes actores hacia un objetivo común y un respeto a las regulaciones establecidas en asociación (*partenariado*), comprendiendo acuerdos, consenso, compromisos, y un apoyo financiero y humano mutuo. Como lo indica la teoría de la regulación (Boyer, 2002), este funcionamiento de las estructuras sociales prueba una cierta estabilidad hasta que llega un momento en el que las reglas no son más respetadas por uno o varios de los actores implicados, entonces surge una nueva situación de crisis y conflicto que en este caso afecta al medio ambiente. La toma de decisiones centralizada, la promoción de un proyecto económico nocivo, los estilos de vida no sustentables de la población, son algunas de las situaciones que van en contra de una educación y gobernanza ambiental. Frente a la crisis y conflicto generados por tales situaciones, nuevos compromisos de los diferentes actores, ya sea me-

diante una colaboración consensual o conflictual, son necesarios para iniciar el ciclo de estabilidad que promueve aquí la intervención social.

Es posible entonces identificar que la intervención socio-ambiental, ejercida desde organismos regionales de concertación, como es el caso del CRE, constituye una práctica que promueve la participación y la construcción de saberes de acción (Schön, 1986; Racine, 2000) en el marco de una gobernanza cívica ambiental. Para brindar una mayor información respecto al entorno de estos organismos ambientalistas, conviene a continuación presentar un breve panorama sobre algunos aspectos de cada uno de los CRE estudiados y de sus orígenes en la región correspondiente.

CRE-SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN (SLSJ)

Esta región ha padecido recientemente los efectos del desempleo: incremento de pobreza y migración de jóvenes en busca de empleo a otras regiones. Esto derivado de un mayor rigor en las regulaciones ambientales, lo que ha repercutido en el cierre de algunas empresas privadas por no cumplir con los estándares de calidad ambiental. Sin embargo, esto no siempre fue así, entre los años setenta y noventa, las regulaciones ambientales eran menos estrictas, se priorizaba la generación de empleos más que la protección del medio ambiente, ocasionando así un incremento considerable de contaminación atmosférica, acuífera y de suelos, así como la tala desmesurada de bosques. Es así como diversas violaciones a los ecosistemas por parte de empresas, municipalidades y ciudadanos, contribuyeron a problemas ambientales, sociales y de salud.

Es este el contexto que propició, en 1973, la movilización colectiva en esta región por la defensa y protección del medio ambiente, permitiendo así el nacimiento del CRE, lo que favoreció la concertación de los diferentes grupos de la sociedad civil. La conciencia ecológica propició entonces las primeras acciones colectivas y el movimiento ambientalista se manifestó de manera particular por la defensa y protección del medio ambiente. Este CRE fue el detonador de los otros que nacieron posteriormente en la provincia de Québec.

Los grupos ambientalistas creados por la sociedad civil son numerosos en esta región y la mayoría de ellos se congregan al interior del CRE, con lo que la intervención social se ve enriquecida. Su trabajo abarca limpieza de ríos y de espacios verdes, restauración del paisaje, organización de actividades

y programas especiales para la población, participación en eventos masivos, emisiones televisivas o de radio promoviendo campañas de sensibilización y de educación ambiental. Ciertos grupos se implican en debates nacionales concernientes a energía, aguas, bosques, gestión de desechos y lucha contra la pobreza. Han actuado y ejercido presión sobre las industrias locales con el fin de disminuir su contaminación. Históricamente, la presión de los grupos ambientalistas ha contribuido a la implementación de regulaciones más severas en la protección de los ecosistemas, aumentando con ello la responsabilidad ambiental de la industria local. Por poner un ejemplo, después de diferentes iniciativas gubernamentales poco exitosas en los años ochenta, fue precisamente el interventor del CRE quien logró influenciar y sensibilizar al sector privado, haciendo que éste se implicase en proyectos de la red ambientalista, beneficiando con ello al organismo como espacio de reunión de representantes de los diversos sectores en un marco de gobernanza cívica ambiental.

A través de la investigación que sustenta esta publicación, se detectó que varios proyectos de intervención socio-ambiental que se ejercen a través de este CRE, son apoyados por industrias locales como parte de su responsabilidad ambiental. Estos financiamientos podrían ser considerados como una compensación por los daños causados a la población y ecosistemas de la región. Se reconoce aquí lo que llamamos el “marketing verde”, la empresa quiere ser percibida por la comunidad como un buen ciudadano corporativo, responsable e implicado con la protección del medio ambiente. Sin embargo, aunque las relaciones entre el interventor del CRE y los actores privados se desarrollan a menudo fuera de la red ambientalista, en espacios públicos de concertación, se puede afirmar que se trata de relaciones que pasaron del conflicto abierto, a la negociación y sensibilización; trabajan ahora en proyectos conjuntos, aunque la naturaleza diferente de estos dos actores hace que en ocasiones sus relaciones sean conflictivas, tal y como ya se vio en la tesis propuesta por Vaillancourt (1994) sobre la concertación conflictual.

CRE-CAPITAL NACIONAL

Una serie de encuentros organizados por grupos ambientalistas con organismos socioeconómicos y entidades públicas, propiciaron el surgimiento del CRE en esta región en 1989, cuando la preocupación ambiental era fuertemente estimulada por la

publicación del reporte Brundtland. Desde entonces, el interventor del CRE, como representante de un organismo de concertación, ha buscado reunir a grupos ambientalistas, municipalidades, empresas públicas y privadas, miembros individuales, con la finalidad de que actúen todos de manera conjunta en favor de la protección ambiental.

Fue a principios de los años noventa cuando las grandes empresas privadas de la región de la Capital-Nacional comenzaron a preocuparse por el medio ambiente, ciertamente sin afectar su productividad, se comprometieron a reciclar sus desechos y a buscar los medios para disminuir la cantidad de recursos energéticos utilizados. Esto se atribuye en cierta forma al interés de la empresa privada por ser reconocida como “buen ciudadano” a nivel regional. Además, algunas empresas en esta región realizan aportaciones financieras “menores” principalmente para la publicación del boletín del CRE, a cambio de un espacio publicitario dentro del mismo. Esto no quiere decir que se inscriban como miembros activos del CRE, más bien se mantienen al margen, aunque ya han comprendido que la intervención del CRE no se presenta de manera extremista, sino buscando la concertación y el diálogo dentro de una gobernanza ambiental promovida por la intervención social.

Las estrategias del interventor del CRE Capital-Nacional para favorecer la participación de actores diversos, se orientan hacia la negociación, la sensibilización y la motivación. Ésta última se presenta por ejemplo, mediante un premio honorífico, “El Fénix del Ambiente”, otorgado a las empresas cuando se comprometen y aplican un código de ética ambiental. Sin embargo, existe aún cierta desconfianza hacia el sector privado entre algunos representantes comunitarios, quienes opinan que no hay acciones “puramente” ambientalistas en los industriales y consideran que siempre predomina el interés económico en sus acciones. Otros ambientalistas prefieren este tipo de implicación del sector privado en las mesas de concertación, que su indiferencia.

Por otro lado, también el estilo de vida y el consumismo de la población constituyen una importante amenaza al medio ambiente. Cada vez son más quienes prefieren vivir en suburbios, fuera del caos ciudadano, lo que deriva en expansión urbana dañina para las áreas verdes vecinas a la ciudad. Se trata además de suburbios que en ocasiones no ofrecen todos los servicios (escuelas, empleos, transporte público, salud, servicios, etc.) y sus habitantes se ven obligados a utilizar el coche para sus traslados, incrementando así la contaminación y el sedentarismo,

contribuyendo a aumentar los índices de obesidad en la población. Se presenta entonces una cadena de problemas en donde se refuerzan modo de vida, degradación del medio ambiente, amenazas a la salud y al bienestar. Por esta razón, la intervención socio-ambiental del CRE busca suscitar un cambio de valores y de estilo de vida en la población, a través de la sensibilización y la educación ambiental.

CRE-MONTREAL

El CRE-Montreal, surge en 1996 entre tensiones con otros organismos ya existentes que competían por el financiamiento público. Los grupos más radicales consideraban que el CRE era aliado del Estado y que intervendrían juntos en sus asuntos, por lo que mantenían una distancia y no querían pertenecer ni participar como miembros de esta nueva red ambientalista. En este contexto, la práctica de intervención se ejerció bajo la negociación y concertación con actores locales, enfocándose en proyectos prioritarios como transporte, agua, gestión de desechos, espacios verdes, planificación urbana.

Al igual que en muchas otras grandes ciudades del mundo, en Montreal la población más desfavorecida es la que también sufre de mayores afectaciones a nivel ambiental. Por ejemplo, en el Este de la Isla de Montreal, donde se encuentran las refinerías petroleras, la concentración de la pobreza es mayor. Se trata de una población que a menudo tiene menores medios para movilizarse, organizarse y reivindicar sus derechos. Es población atendida por trabajadores sociales debido a un mayor deterioro en su calidad de vida. Por citar un ejemplo, el paso diario de más de 50 mil vehículos en estos barrios ocasiona altos niveles sonoros que rebasan los límites permitidos por salud pública; a lo que habría que añadir la contaminación atmosférica de las industrias vecinas. El parque industrial de la ciudad de Montreal es uno de los más importantes y diversificados del país. Además, cerca de ochenta por ciento de la superficie de Montreal es asfaltada o construida, la mineralización del espacio urbano representa un factor importante de calentamiento climático en la ciudad. Todas estas son condiciones que afectan la salud de la población y contribuyen a incrementar sus niveles de estrés.

CONCLUSIÓN

El contexto de cada una de las tres regiones estudiadas permite mostrar la relevancia de las prácti-

cas de intervención a través de organismos como el CRE. Las riquezas naturales que abundan en estas regiones despiertan en los actores económicos el deseo de explotación. Además, frente a un Estado que a menudo promueve estos mismos intereses, surgen iniciativas de la sociedad civil para proteger y defender a los ecosistemas locales. Se trata de situaciones que se presentan con certeza en muchas regiones del mundo, pero habría que analizar si alcanzan los tres niveles presentes en los CRE de Québec: 1) la acción colectiva; 2) el apoyo de ésta acción por parte de la práctica organizada de la intervención socio-ambiental; 3) el reconocimiento y legitimación de estas prácticas, por parte del Estado.

Aunque el trabajo social como disciplina y como profesión no se encuentra presente entre los interventores de estos organismos, la práctica de la intervención socio-ambiental se desarrolla efectivamente desde diversas profesiones y ha sido reconocida y legitimada por el Estado. En Québec, al igual que en otras regiones del mundo, la degradación del medio ambiente origina numerosos problemas socio-ambientales, por lo que sería deseable una mayor participación de los profesionales del trabajo social en la intervención. Sin embargo, la contribución de los diversos participantes en la intervención favorece igualmente a la gobernanza cívica. Entre los actores participantes, aquellos pertenecientes al sector comunitario son los más activos, dada la compatibilidad de la misión de estos organismos con la del CRE. Se observa que en la gobernanza cívica existen múltiples tipos de relaciones: consensuales, conflictuales y *partenariales* o asociativas, ya sea que se presenten al interior o al exterior de la red de los CRE. Por lo que el modelo de desarrollo local de la intervención es el dominante en las estrategias seguidas por los interventores, dependiendo de los retos ambientales de cada época y contexto.

Se enfatiza la contribución de interventores y de los diversos actores sociales en el desarrollo de una gobernanza cívica ambiental. Una contribución que resulta de relevante importancia reconocer, difundir y poner en práctica en más regiones del mundo. Pero además de ello, es importante destacar la legitimación que el Estado otorga a estas prácticas de intervención, diseñadas y desarrolladas en un marco de democracia participativa. Ojalá que la acción colectiva alcance este reconocimiento y legitimación por parte del Estado en muchos otros contextos más, es algo que resulta imperativo promover y propiciar.

AGRADECIMIENTOS

Investigación realizada con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT - México), beca de excelencia para los estudios de doctorado de la autora, en la Université Laval. Se agradece la participación de los interventores y miembros del CRE entrevistados, sin su consentimiento y su colaboración, la investigación no hubiera sido posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Babin, R. (2003). Réappropriation communautaire de la protection de l'environnement en Acadie, en C. Gendron y J-G. Vaillancourt (dir.), *Développement durable et participation publique. De la contestation écologiste aux défis de la gouvernance*. (pp. 265-285) Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, Bardin, Laurence (2003). *L'analyse de contenu*. Vendôme: Presses Universitaires de France.
- Bardin, L. (2003). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France, 1977 Primera edición, Vendôme.
- Boulianne, M. et Comeau, Y (2001). Une analyse politique des savoirs d'expérience : le cas de l'organisation communautaire en économie sociale, *Intervention*, 114, 25-34.
- Boyer, R (2002). Aux origines de la théorie de la régulation", en R. Boyer e Y. Saillard (dir.), *Théorie de la régulation, l'état des savoirs* (pp-21-30). Paris: Éditions La Découverte.
- Canet, R. (2004). Qu'est-ce que la gouvernance?, en el Seminario *Les nouveaux modes de gouvernance et la place de la société civile*. Conferencia organizada por el Service aux collectivités de l'UQAM. Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Écomusée du fier monde, Montréal, 16 de marzo, 8 p. Disponible en: <http://www.chairemc.d.uqam.ca/upload/files/Publications/conference/canet-mars-2004.pdf> Fecha de consulta: octubre 28, 2005.
- Ducharme, M.N. y Vaillancourt, Y. (2003). À l'orée d'une gouvernance associative? L'expérience du fonds québécois d'habitation communautaire. *Economie et Solidarités*, 36, (1), 110-125.
- Estes, R. (1993). Toward sustainable development: from theory to praxis. *Social development Issues*, 15 (3), 1-29.
- Gadrey, J. (1994). La modernisation des services professionnels: rationalisation industrielle ou rationalisation professionnelle? *Revue française*

- de sociologie*, 35, (2), 163-195. <http://dx.doi.org/10.2307/3322031>
- Hardina, D (2002). *Analytical Skills for Community Organization Practice*. NewYork: Columbia University Press.
- Institut de la statistique du Québec (2012). *Coup d'œil sur les régions*. Gouvernement du Québec. http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_00/region_00.htm Fecha de consulta: agosto 15, 2012.
- Maldonado-González, A.L. (2008). *La contribution de l'organisation communautaire et des participants à un mode de gouvernance civique en environnement dans trois régions administratives du Québec*. Tesis doctoral, Faculté des sciences sociales, Université Laval, Québec.
- _____ (2006). La degradación y destrucción del medio ambiente físico, una forma de violencia estructural. En C. Campillo y J. G. Zúñiga: *La violencia social en México y sus manifestaciones, una aproximación multidisciplinaria* (pp.343-371). Monterrey: UANL.
- Merrien, F.X. (1998). De la gouvernance et des États-providence contemporains. *Revue internationale des sciences sociales*, 155, . 61-71.
- Nelisse, C. (1997). L'intervention : catégorie floue et construction de l'objet, en C. Nelisse et R. Zúñiga (dir.) *L'intervention, les savoirs en action*, Memorias del Coloquio realizado en Montreal, 14-15 mayo 1996, ACFAS (pp.17-43). Sherbrooke: GGC Éditions.
- Paquet, G. (2001). La gouvernance en tant que manière de voir: le paradigme de l'apprentissage collectif, en L. Cardinal y C. Andrew, *La démocratie à l'épreuve de la gouvernance* (pp.9-41). Ottawa : Les presses de l'Université d'Ottawa.
- Racine, G. (2000). *La production de savoirs d'expérience chez les intervenants sociaux. Le rapport entre l'expérience individuelle et collective*. Montréal : L'Harmattan.
- Rothman, J (1995). Introduction, en J. Rothman, J. L. Erlich, J. E. Tropman y F. M. Cox, *Strategies of community intervention*. Macro practice. (pp.3-25) Illinois, EE : Peacock Publishers, Inc.
- RNCREQ (2011). Rapport annuel 2010-2011. La force d'un réseau au service de l'environnement et du développement durable". *Regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec*. (en línea). Disponible en: http://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/Rapport_annuel_2010-2011-final.pdf Fecha de consulta: enero 15, 2012.
- Sauvé, L. (1999). La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad : en busca de un marco de referencia educativo integrador. *Tópicos en Educación Ambiental 1* (2), 7-25.
- Schön, D. (1986). Vers une nouvelle épistémologie de la profession face à la crise du savoir professionnel, en A. T. et E. W. Ploman (dir.) *Savoir et développement, une perspective mondiale*, Série des symposiums / 15, (pp. 66-93). Toronto : L'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.
- Vaillancourt, Y (1994). Éléments de problématique concernant l'arrimage entre le communautaire et le public dans le domaine de la santé et des services sociaux, *Nouvelles Pratiques Sociales*, 7, (2), 227-248.

NOTAS

- 1 CRE por sus siglas en francés: *Conseil régional de l'environnement*.
- 2 En Québec utilizan el término "nacional" cuando en realidad se trata de "provincial". Defienden su autonomía y quieren su independencia de Canadá, se consideran una nación. De ahí que la región donde se encuentra la ciudad de Québec, capital de la provincia, es llamada región de la "Capital Nacional".
- 3 Los directores del CRE son quienes realizan la práctica de la Intervención Social.
- 4 Regroupement National des Conseils Régionaux de l'Environnement du Québec (RNCREQ).